



Expte.: 052/2021 (A/SER-037504/2020)

D. Francisco Javier Fernández Arroyo, Jefe de Servicio de Contratación, como Secretaria de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al contrato de servicios denominado "*Gestión de un centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid*"

### CERTIFICO:

La Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 21 de febrero de 2022, en que se procedió al estudio de la documentación de subsanación presentada por FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS, ha decidido excluir a la citada entidad por no cumplir con lo exigido en pliegos, y en concreto, por no acreditar la solvencia técnica mínima necesaria exigida en el apartado 7.2 de la cláusula 1 del PCAP y no cumplir con la acreditación de la disponibilidad de los medios materiales (inmueble) exigido en el PCAP, ya que:

- a) En cuanto a los **Seguros**, la empresa ha subsanado correctamente tanto lo relativo al seguro de responsabilidad civil, como al seguro multi-riesgo.
- b) En lo que respecta al **Compromiso de adscripción de medios**, se considera subsanados los defectos relativos a la acreditación de los medios personales y medios materiales.
- c) En relación con la **Solvencia técnica o profesional (artículo 90.1.a) LCSP**, el apartado 7.2 de la cláusula 1 del PCAP establece que se deberá acreditar un importe mínimo de 664.200,00 euros (sin IVA), como ejecutado durante el año de mayor ejecución de los últimos tres ejercicios cerrados, en uno o varios servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

En virtud del apartado 3 del artículo 90 de la LCSP, se entenderá por servicios de igual o similar naturaleza, la gestión de un programa específico de intervención con mujeres víctimas de violencia sexual con una duración de un año y otro programa específico de intervención psicosocial con víctimas de violencia de género con una duración de un año.

De la documentación aportada por la entidad propuesta adjudicataria en subsanación se hacen las siguientes apreciaciones:

- La entidad ha presentado documentación justificativa relativa a un total de 14 programas subvencionados. De dichos programas la Mesa de contratación ha decidido:
  - Cinco de los 14 programas subvencionados justificados documentalmente por la entidad ("*Programa Ciberacoso*", "*Programa Frida*", "*Programa Generando miradas: Formación para prevenir, detectar e intervenir con mujeres en riesgo de encontrarse en situación de prostitución o trata con fines de explotación sexual*", "*Programa Mujer inmigrante y empleo del hogar: situación actual, retos y propuestas*" y "*Programa No acepto*"), NO pueden ser considerados como servicios de igual o similar naturaleza por el contenido de las actividades que integran los mismos. No se trata de programas específicos de intervención con mujeres víctimas de violencia sexual o de intervención psicosocial con víctimas de violencia de género, por lo que no son tenidos en cuenta a la hora de cuantificar el cumplimiento del importe de la solvencia técnica exigida.
  - Los nueve programas restantes (*Programa de atención integral a víctimas de violencia de género*", "*Programa Despega: Atención psicosocial a menores víctimas de violencia de género*", "*Programa Libre me quiero: Prevención y atención de la violencia de género en*



mujeres jóvenes”, “Programa sentirse bien: Integrarse bien” “Programa Empodera-Empleo”, “Programa Empodérate”, “Programa Prevención y protección a menores víctimas de violencia de género”, “Programa Suma” y “Programa Tendiendo puentes contra la violencia de género”) contienen diversas prestaciones, de las que, si bien, algunas de ellas podrían entenderse como servicios de igual o similar naturaleza de acuerdo con lo establecido en el PCAP, otras muchas prestaciones no servirían para acreditar la solvencia técnica exigida. Además, las prestaciones que pudieran considerarse de similar o igual naturaleza de varios de estos programas, en unos casos tienen una duración inferior a un año (*Programa Empodera Empleo, Programa de Prevención y protección a menores víctimas y Programa Empodérate*) y en otros, no están dirigidos específicamente a mujeres víctimas de violencia sexual o víctimas de violencia de género( “Programa Despega” y “Programa Sentirse bien”)

En todo caso, de la documentación aportada relativa a estos nueve programas no se puede establecer la debida separación económica de cada una de las actividades que integran los programas, por lo que no es posible determinar qué parte del importe total justificado se corresponde con los servicios que sí estarían comprendidos dentro de la solvencia exigida y cuáles no y, en consecuencia, no se pueden tener en cuenta a la hora de acreditar la solvencia técnica exigida.

De lo anterior, se concluye que la entidad propuesta adjudicataria no ha acreditado la ejecución de servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato por importe de 664.200,00 euros durante el año de mayor ejecución de los últimos tres ejercicios cerrados y, por tanto, no cumple con la solvencia técnica exigida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible; o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a fecha de firma

EL PRESIDENTE DE LA MESA  
Vº. Bº.

EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo.: Antonio Benito Martínez

Fdo.: Francisco Javier Fernández Arroyo

